

Visión Católica de la Minería: Estudios de Casos

La mina de oro de Kibali, Diócesis de Isiro-Niangara, República Democrática del Congo

**Ciudad de Durba, jefatura de Kibali, territorio de Watsa, provincia de
Haut-Uélé, noreste de la República Democrática del Congo**

Henri Muhiya

Ex-secretario ejecutivo de la Comisión de Recursos Naturales de la Conferencia Episcopal Católica del
Congo



Resumen

En 2015, la Comisión para los Recursos Naturales de la Conferencia Episcopal del Congo (*Commission Episcopale pour les Ressources Naturelles*, CERN) y la sección neerlandesa de Pax Christi, PAX, publicaron un informe sobre la situación de la mina de oro de Kibali, cerca de la frontera con Uganda. El informe documentaba numerosos abusos contra los derechos humanos y el medio ambiente cometidos por la empresa Kibali Goldmines. Quienes se organizaron para reclamar sus derechos fueron reprimidos por las fuerzas armadas, lo que provocó algunos incidentes graves. Este estudio de caso narra cómo la CERN se asoció con organizaciones internacionales para documentar las violaciones de los derechos humanos y recabar pruebas que respaldaran la defensa de una mejor convivencia y una distribución más equitativa de los ingresos. Destaca cómo la publicación del informe condujo a la apertura de un diálogo entre el Estado congoleño, Kibali Goldmines y las comunidades locales. El diálogo llevó a la empresa a colaborar con la sociedad civil para reforzar la normativa y aumentar la distribución de los ingresos. El caso también hace hincapié en la importancia de formar a las poblaciones locales sobre el Código Minero y sus derechos, a fin de garantizar que las regalías mineras promuevan su desarrollo humano integral.

1. Antecedentes

En la República Democrática del Congo, la Iglesia católica actúa como guardián para proteger a las comunidades de los abusos que suelen acompañar a las actividades mineras. Observar y documentar las violaciones de los derechos humanos, abogar por el cambio y apoyar a las partes interesadas para garantizar una distribución más equitativa de los ingresos mineros: esta es la labor de la Conferencia Episcopal Nacional del Congo (*Conférence Episcopale Nationale du Congo*, CENCO) en relación con las consecuencias sociales y ecológicas de la minería. Esta sección ofrece una visión general de la minería en la RDC y de las razones que llevaron a la CENCO a responder mediante la defensa de los derechos y otras acciones.

La RDC cuenta con inmensos yacimientos de diversos minerales, algunos de los cuales se consideran «estratégicos» o «críticos». Posee casi el 50 % de las reservas mundiales de cobalto y se sitúa como su principal productor, con un 70 % de la producción mundial (African Green Minerals Observatory, s. f.). En 2025, la RDC era el segundo mayor productor mundial de cobre, después de Chile (Bloomberg News, 2026a). También cuenta con las mayores reservas mundiales de coltán y es su mayor productor, aunque Ruanda es su principal exportador debido al comercio ilícito en el este de la RDC, cuyos ingresos por ventas alimentan el conflicto en la región (Global Witness, 2025). La RDC también cuenta con reservas de litio. Actualmente se está construyendo en el sur de la RDC la mina de litio de roca dura más grande del mundo, operada por el grupo chino Zijin Mining (Bloomberg News, 2026b).

La minería es un sector económico clave. En 2023, el Banco Africano de Desarrollo (s. f.) estimó que representaba el 39 % del PIB del país, el 95 % de sus exportaciones y el 42 % de los ingresos públicos. La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, 2025, p. 17) estimó cifras similares para 2023, con una contribución global al PIB del país del 37,9 %, lo que supone el 99,57 % de sus exportaciones, el 47,68 % de los ingresos públicos y el empleo del 20,39 % de la población activa del país. En términos de producción, el cobre lidera con 2 842 022 toneladas extraídas en 2023, seguido del cobalto (139 838 toneladas), el oro (34 524 toneladas), la casiterita (29 239 toneladas) y los diamantes (8 308 carats). Se estima que el cobre generó 24 189 millones de dólares estadounidenses en 2023, seguido del cobalto (5057 millones), el oro (2367 millones) y los diamantes (85 millones) (EITI, 2025, p. 18).

Sin embargo, la industria minera se enfrenta a una serie de retos, como la incapacidad del Gobierno para regular el sector de manera eficaz, la falta de conciencia de la población sobre sus derechos y las influencias geopolíticas. La abundancia de recursos naturales del país no se ha traducido en mejores condiciones de vida. Se estima que el 73,5 % de la población congoleña vivirá con menos de 2,15 dólares al día en 2024 (Banco Mundial, s. f.), y que el 64,5 % vivirá en situación de pobreza multidimensional, es decir, careciendo de salud, educación, acceso al agua y la electricidad, y otras privaciones (OPHI, 2025).



Las manifestaciones más evidentes de esta paradoja de pobreza generalizada en medio de la riqueza de recursos son, entre otras, la falta de condiciones de vida dignas para las poblaciones que viven cerca de las explotaciones mineras, la falta de infraestructuras básicas, las deficiencias en la gestión estatal de los servicios sociales, el daño medioambiental, los conflictos y guerras recurrentes, y las violaciones de los derechos humanos. Entre los ejemplos recientes de violaciones de los derechos humanos y medioambientales se incluyen el colapso, en noviembre de 2025, de una presa de contención de una mina de cobalto en Lubumbashi, que inundó tres barrios de la ciudad con millones de metros cúbicos de agua tóxica, lo que obligó a los residentes a huir y privó a la población del acceso al agua potable (Business and Human Rights, 2025), y el derrumbe de la mina de coltán en Rubaya, Kivu del Norte, en enero de 2026, que causó la muerte de más de 200 personas, seguido de otro derrumbe en marzo de 2026 que también causó la muerte de más de 200 personas (Mongabay Africa 2026). Las minas de la región proveen el 15 % del coltán mundial y están controladas por el grupo rebelde M23, respaldado por Ruanda, que se estima que obtiene 800 000 dólares al mes del comercio de coltán (Global Witness, 2026).

Esta situación, de la que la Iglesia es a la vez testigo y víctima, ha llevado a la CENCO a involucrarse en cuestiones mineras. Dada su identidad y misión, las acciones de la CENCO han consistido principalmente en cartas pastorales, declaraciones, mensajes, actividades de incidencia y la participación de determinadas comisiones episcopales, diócesis, congregaciones religiosas e instituciones educativas. Entre sus logros se encuentran la documentación de casos, el apoyo a las comunidades, la incidencia, la educación en derechos humanos y, en ocasiones, la mediación entre el Estado y las empresas mineras.

Este estudio de caso se centra principalmente en la labor de la Comisión Episcopal para los Recursos Naturales (*Commission Episcopale pour les Ressources Naturelles*, CERN) de la CENCO, que es su duodécima comisión técnica.¹ Aunque otras comisiones ya se ocupaban de cuestiones de justicia social y medioambiental, como Caritas Desarrollo, Justicia y Paz, y Educación Cristiana, la CENCO decidió en 2007 crear una comisión ad hoc que se dedicara íntegramente a los recursos naturales (CENCO, 2007). Esta decisión surgió de una observación: la paradoja de la abundancia de recursos naturales, por un lado, y la pobreza generalizada y las sucesivas guerras que han desgarrado el país, por otro, cuya causa principal era la explotación de los recursos naturales. El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre la República Democrática del Congo describió las guerras en la RDC como guerras económicas o guerras de saqueo de recursos naturales (Consejo de Seguridad de la ONU, 2003). La idea de crear la CERN fue propuesta por la Comisión Episcopal de Justicia y Paz, a partir de una serie de investigaciones de campo que revelaron las dificultades a las que se enfrentaban las mujeres para acceder a

¹ La CENCO no es la única institución eclesial que trabaja en cuestiones relacionadas con la minería en la República Democrática del Congo. También participan varias congregaciones religiosas, como los jesuitas, los misioneros combonianos, los salesianos, los clar-etianos, las Hermanas del Buen Pastor y otras. También participan algunas universidades, como la Universidad Católica de Bukavu. Dado su papel coordinador en el país, este estudio de caso se centra en la CENCO.

tierras cultivables debido a la minería y a las guerras asociadas a ella. La creación del CERN también se inspiró en la labor del Centro de Estudios de Acción Social, un centro social jesuita de Kinshasa.²

Se ha encomendado a la CERN la tarea de recopilar toda la información disponible y fiable sobre la explotación de los recursos naturales y ponerla a disposición de la CENCO y de las organizaciones a nivel diocesano, con el fin de promover una explotación más justa de los recursos naturales, que respete los derechos humanos y el equilibrio ecológico y beneficie a la población. La CERN trabaja tanto a nivel político como a nivel de base. A nivel político, el objetivo es influir en las leyes y decisiones a favor de una mejor gestión de los recursos naturales. A nivel de base, el objetivo es educar, informar y movilizar a la población para que sea consciente de sus derechos y obligaciones. También colabora, cuando procede, con organizaciones de la sociedad civil locales, nacionales e internacionales, así como con el gobierno nacional y local, las empresas mineras y las comunidades a través de sus representantes diocesanos. La CERN está financiada por organizaciones eclesíásticas hermanas y por gobiernos o instituciones internacionales a través de subvenciones.³

Para cumplir su misión, la CERN ha ido estableciendo gradualmente una estructura que abarca tanto el ámbito nacional como diocesano. A nivel nacional, al igual que otras comisiones episcopales, el CERN está compuesto estatutariamente por cuatro obispos y un secretario ejecutivo que coordina al personal.⁴ También incluye a seis obispos miembros que representan al CERN en cada una de las seis provincias eclesíásticas de la RDC.⁵ A nivel diocesano, la CERN actúa como punto focal con una estructura flexible, que comprende, cuando es posible, un representante de la Comisión de Justicia y Paz, Cáritas, la Comisión de Educación Cristiana y organizaciones de la sociedad civil. Esta estructura diocesana se denominó inicialmente «Observatorio de los Recursos Naturales» (*Observatoire des Ressources Naturelles*, ORN), aunque algunas diócesis también han llegado a llamarla «Comisión Diocesana de Recursos Naturales».⁶

La misión de los ORN es recopilar datos sobre el terreno y documentar casos, transmitir información a la CENCO y a la Secretaría de la CERN, apoyar a las poblaciones locales mediante la educación y la información, movilizar a los miembros de la comunidad y llevar a cabo actividades de incidencia política a nivel local. Estas se refieren a las cinco áreas de acción ciudadana establecidas por la CENCO en su «Vademécum para los ciudadanos congoleños sobre la gestión de los recursos naturales», publicado en 2009, y que siguen siendo las directrices estructurantes del trabajo de la CENCO en la actualidad: 1) Sensibilización y desarrollo de capacidades; 2) Apoyo y movilización social; 3) Seguimiento; 4) Investigación-acción participativa, documentación y publicación; y 5) Cabildeo y defensa de causas. En el caso que se analiza en las secciones siguientes, la Secretaría de la CERN trabajó principalmente con la ORN de la diócesis de Isiro-Niangara y PAX, una organización eclesíástica con sede en los Países Bajos. El autor de este estudio de caso ocupó el cargo de secretario ejecutivo de la CERN desde

² El CEPAS coordinó el trabajo del Foro de la Sociedad Civil de la RDC en 2007 en su análisis de doce contratos mineros que había firmado el Gobierno congoleño durante el período de transición 2003-2006. En 2007, el gobierno recién elegido encargó una revisión de estos contratos, y el trabajo de CEPAS se incorporó a la labor de la comisión. Véase Global Witness (2007) para un análisis del proceso de revisión de estos contratos mineros.

³ Entre las organizaciones financiadoras se encuentran Swiss Fastenopfer, CAFOD, Cáritas Luxemburgo, Catholic Relief Services, CCFD Terre Solidaire, CIDSE, CORDAID, Development and Peace, Missionary Aid, Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, Diócesis de Estocolmo, Franciscans International, Misereor, Bread for Neighbours, PAX, Southern Africa Resource Watch, Secours Catholique, Cáritas Francia, Unión Europea, World Vision, WWF y la Santa Sede.

⁴ La dotación ha oscilado entre dos y seis personas, dependiendo del financiamiento, e incluía los puestos de coordinador, coordinador adjunto, responsable de investigación y seguimiento, responsable de finanzas, responsable de comunicación y conductor de logística.

⁵ La Iglesia católica en la RDC comprende 48 diócesis agrupadas en seis provincias eclesíásticas (arquidiócesis).

⁶ El personal de estos observatorios diocesanos es voluntarios. Pueden recibir pagos por los proyectos financiados.

octubre de 2008 hasta septiembre de 2023, bajo la dirección del cardenal Fridolin Ambongo, actual arzobispo de Kinshasa.⁷

2. El proyecto de la mina de oro de Kibali

La mina de oro de Kibali fue adquirida en 2009 por Kibali Goldmines a la empresa estatal de la RDC SOKIMO. La provincia Oriental, en el noreste de la RDC donde se iban a llevar a cabo las operaciones mineras, había sido devastada por la guerra durante más de dos décadas.⁸ Tras el genocidio de Ruanda de 1994, la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo libró una guerra que condujo a la salida del presidente Mobutu Sese Seko y a que Laurent Désiré Kabila asumiera la presidencia en mayo de 1997. En agosto de 1998 estalló otra guerra, liderada por el Agrupamiento Congoleño por la Democracia, apoyado por Ruanda, y el Movimiento para la Liberación del Congo. Estos dos grupos rebeldes ocuparon las provincias orientales de la RDC (Kivu del Norte y del Sur, Maniema, la Provincia Oriental, parte de Ecuador y parte de Katanga). Las tropas ruandesas y ugandesas se enfrentaron en la ciudad de Kisangani en 2002 por el control de las zonas mineras. A pesar de la retirada de las tropas extranjeras, algunos grupos armados permanecieron activos. En la Provincia Oriental, entre ellos se encontraban el Ejército de Resistencia del Señor de Uganda y el grupo de Thomas Lubanga en la Provincia de Ituri.

El acceso a la zona era difícil. Las carreteras se habían vuelto intransitables a causa de la guerra y el acceso a los productos de primera necesidad era limitado. Para garantizar la inversión minera, el Estado tuvo que desplegar soldados, ya que las fuerzas policiales no eran suficientes para proporcionar la seguridad necesaria para evitar una posible reanudación de la guerra. Esta seguridad militarizada aumentó la probabilidad de que se produjeran abusos de los derechos humanos, ya que sus métodos eran de mano dura, incluso con manifestantes pacíficos, como se analizará más adelante. Circulaban informes a nivel local, y más allá de eso, se estaban produciendo violaciones de los derechos humanos.

A pesar de esta creciente militarización, Kibali Goldmines aportó capital a una región que había estado largamente abandonada y mejoró su situación económica en cierta medida. Se estima que entre 2009 y 2015, la empresa inyectó unos 160 millones de dólares estadounidenses en la economía local a través de la electrificación, la infraestructura vial, la provisión de viviendas, la prevención del VIH y la malaria, y diversos proyectos comunitarios (PAX y CERN, 2015). En el momento de la adquisición, en 2009, las reservas de oro se estimaban en 1,5 millones de onzas. El primer lingote de oro se produjo en septiembre de 2013. En 2017, la mina produjo alrededor de 18,7 toneladas de oro (600 000 onzas), generando un beneficio de 287,7 millones de dólares estadounidenses (Fualdes, 2018).

⁷ Cuando asumió la primera presidencia del CERN, el cardenal Ambongo era obispo de Bokungu-Ikela. El segundo presidente fue monseñor Sébastien Muyengo, obispo de Uvira, y el tercero, actual presidente, es monseñor Libère Pwongo, obispo de Basankusu. La actual secretaria del CERN es Jeanne Marie Abanda.

⁸ La Provincia Oriental se divide hoy día en cuatro provincias: Ituri, Tshopo, Bas-Uélé y Haut-Uélé, donde se encuentra la mina de oro (en los territorios de Watsa y Faradje).



Sin embargo, se plantearon una serie de desafíos, en particular la difícil coexistencia entre la minería industrial y la artesanal y el reasentamiento de la población, que algunos consideraron insatisfactorio. Resulta difícil recopilar estadísticas sobre el número de mineros artesanales que trabajan en la zona y de personas desplazadas y reasentadas. Esta falta de datos refleja una actitud generalizada de desatención por parte de los gobiernos central y provinciales hacia las poblaciones locales. El Estado no estaba cumpliendo con sus responsabilidades en materia de seguimiento económico y social, ni en la prestación de servicios sociales básicos. No obstante, la minería de oro siguió avanzando, y la empresa proporcionó la infraestructura y los servicios necesarios para su funcionamiento. En 2018, las reservas de oro de la mina se reestimaron en 8,7 millones de onzas (Fualdes, 2018). En la sección siguiente se analizan las acciones que CENCO ha emprendido, a través del CERN y la ORN de Isiro-Niangara, para documentar las violaciones de los derechos humanos y recabar pruebas que respalden la defensa de una mejor convivencia entre la empresa y las comunidades locales

3. Análisis de las acciones de CENCO/CERN

Documentación

La investigación-acción participativa y la documentación constituyeron la primera respuesta del CERN ante la situación, en colaboración con la ORN de Isiro-Niangara y PAX. Inicialmente, la ORN facilitó al CERN información sobre la situación sobre el terreno mediante un formulario prediseñado, que abordaba algunas cuestiones relativas a hechos y acontecimientos clave. Fue así como el jefe de la ORN de Isiro-Niangara ya había informado al CERN de un incidente ocurrido el 18 de enero de 2015 en el que un hombre de 28 años, Héritier Wembo, fue arrojado por soldados a una hoguera de neumáticos encendida por mineros artesanales que protestaban contra la expropiación de sus canteras por parte de Kibali Goldmines. Tras pasar la noche atado en una celda, los soldados hicieron desfilar a Wembo por las calles en su camioneta para intimidar y disuadir a la población local de manifestarse. El administrador del distrito lo rescató más tarde ese mismo día para que pudiera ser ingresado en el hospital estatal de Watsa. Como sus quemaduras eran graves, fue derivado al hospital privado de Kibali, donde la empresa atendía a sus trabajadores. Pero Wembo se negó y, en su lugar, buscó tratamiento en la medicina tradicional. Su historia se convirtió en un punto central de la incipiente labor de defensa de CERN (véase la sección 3.3). Dado que existían otros informes de violaciones de los derechos humanos, PAX se había puesto en contacto con CERN para llevar a cabo un estudio conjunto sobre violaciones de los derechos humanos, publicado en 2015 bajo el título «Kibali, el gigante minero: Eliminar las impurezas para que el oro sea puro» (PAX y CERN 2015).⁹ PAX aportó la financiación y el CERN contribuyó con su experiencia sobre el terreno. El objetivo del estudio era ayudar a poner fin a las violaciones de los derechos humanos, facilitar la coexistencia pacífica entre la empresa y las comunidades locales, y garantizar que estas se beneficiaran de las operaciones mineras. Antes de su publicación, sus conclusiones fueron debatidas en Kinshasa por el director general de Kibali Goldmines y el secretario ejecutivo del CERN.

Sin embargo, la investigación por sí sola no es suficiente. Debe ir seguida de actividades de promoción para cambiar la situación, y el cambio depende de los actores que ostentan el poder de decisión o la influencia a diversos niveles. Entre ellos se incluyen los directivos de las empresas, los funcionarios estatales, los inversores, los ciudadanos de los países donde están registradas las empresas mineras, los organismos reguladores internacionales y las propias comunidades afectadas por la minería. Una lección importante fue la cuidadosa consideración de los riesgos que entrañaba la publicación de los resultados de la investigación. En

⁹ El original en francés, «Géant minier Kibali. Ôter les impuretés pour que l'or soit pur», juega con la imagen del «oro puro» y las «impurezas» figurativas de las violaciones de los derechos humanos como consecuencia de la minería del oro.

este caso, fue fundamental discutir estos riesgos con Kibali Goldmines antes de la publicación. El provocativo título del estudio podría haber afectado al precio de las acciones de la empresa en las bolsas de Toronto o Nueva York. Para mitigar este riesgo, se tomó la decisión de facilitar una comunicación directa y pacífica entre la empresa y la comunidad antes de la publicación, con el fin de aprovechar la «apertura al diálogo con la comunidad» de la empresa para reconstruir su imagen y trabajar en su permiso social.



Tras la publicación de la investigación, fue necesario trabajar para garantizar su aceptación por parte de la empresa en cuestión, las comunidades afectadas, los gobiernos nacional y provincial, así como la administración local y el ejército, que era la principal parte acusada de violaciones de derechos. A lo largo de este proceso, hubo que preservar la imagen y la credibilidad de la Iglesia garantizando el rigor científico y ético de la investigación y la difusión adecuada de sus resultados. Por ello se tomó la decisión de presentar el informe en la localidad de Durba, donde se desarrollaban las actividades mineras y se habían cometido violaciones de los derechos humanos. Esta estrategia entrañaba tanto ventajas como riesgos. Por un lado, presentar la investigación ante un público amplio y sacar a la luz lo que las víctimas de violaciones de los derechos humanos no podían expresar por falta de recursos ofrecía cierto consuelo a las comunidades y esperanza de que la situación mejorara. Por otro lado, exponer y recordar a las personas los daños que habían sufrido podía ser como echar sal en la herida. Esto era lo que temía la empresa por la seguridad de sus inversiones. Para evitar cualquier contratiempo, se organizaron reuniones de preparación psicológica el día antes de la presentación. El equipo de CERN-PAX celebró sesiones de trabajo con el administrador del territorio de Watsa, organizaciones locales de la sociedad civil, el obispo de Isiro-Niangara y la dirección de Kibali in situ en Durba. El tema más delicado fue el caso de Héritier Wembo (véase la sección 3.3).

El lanzamiento tuvo lugar en agosto de 2015 en un salón parroquial abarrotado —la parroquia había sido reubicada debido a las actividades mineras, y la empresa financió sus nuevos edificios—. Fue moderado por el secretario ejecutivo de la CERN, quien permitió que las autoridades políticas y administrativas, los líderes religiosos y los miembros de la sociedad civil y la comunidad se expresaran libremente. Los representantes de la empresa respondieron a las numerosas preguntas sin vacilar. Tras el lanzamiento, la tensa situación que había persistido durante meses finalmente se alivió. Se restablecieron las bases para el diálogo entre la empresa y la comunidad. La tarea consistía ahora en poner en práctica las recomendaciones del estudio. Estas se referían, entre otras cosas, al plan de reubicación de la empresa, la represión de las manifestaciones pacíficas por parte de las fuerzas de seguridad y su acoso a la población, la coexistencia entre la empresa y los mineros artesanales, la falta de zonas reservadas para la minería artesanal, la redistribución de los ingresos, la falta de empleo, el desconocimiento de la población sobre sus derechos y obligaciones, los mecanismos de reparación de las violaciones de los derechos humanos y el acceso a la justicia.

En materia de seguridad, el estudio recomendaba organizar cursos de formación, definir el papel de los servicios de seguridad dentro de la concesión minera, supervisar y evaluar sus actuaciones, e imponer sanciones en caso de conducta indebida. En materia de comunicación, recomendaba informar a la población sobre los acuerdos y contratos que vinculaban a la empresa con el Estado, las leyes relativas al sector minero y los planes de reubicación de la empresa. Se presentaban como esenciales la consulta con las comunidades y el diálogo para resolver los problemas. Por último, en lo que respecta a la convivencia, se recomendó formar y organizar a la población en asociaciones de derechos humanos para la supervisión ciudadana, apoyar la creación de



cooperativas mineras y agrícolas, diversificar la economía y crear oportunidades de empleo alternativas. En el caso de los mineros artesanales, se instó al Estado a crear zonas de minería artesanal viables. En cuanto a la redistribución de ingresos y la presentación de denuncias, se invitó a la sociedad civil a formar y apoyar a la población, especialmente en la gestión de los ingresos mineros, así como a dialogar con la empresa y las autoridades estatales. Para mitigar el riesgo de consecuencias imprevistas, como el vandalismo de la infraestructura de la mina en respuesta a la revelación de violaciones de los derechos humanos (y las consiguientes detenciones arbitrarias entre la población local),¹⁰ CERN emprendió nuevas acciones, entre ellas la defensa, el apoyo y la formación de las comunidades.

Promoción

En julio de 2015, el entonces Consejo Pontificio «Justicia y Paz»¹¹ organizó en Roma una Jornada de Reflexión sobre los «gritos» que provocaba la minería (Francisco 2015) e invitó a representantes de las comunidades afectadas por las actividades mineras a dar su testimonio. Se invitó a la CERN a asistir. Su secretario ejecutivo estuvo acompañado por dos representantes de la comunidad, entre ellos Hérítier Wembo (véase la sección 3.3). Esta plataforma internacional, antes de la presentación del informe en agosto de 2015, ofreció un primer foro para la promoción de la causa sobre la base de las conclusiones del informe.

Otra plataforma de influencia para el cambio fue una mayor colaboración entre la sociedad civil y las empresas mineras en la revisión del Código Minero. Uno de los retos de la minería en la RDC es que no beneficia suficientemente a la población congoleña. El Código Minero de 2002 tenía por objeto atraer a los inversores, pero su aplicación demostró que los inversores habían obtenido más beneficios que las poblaciones locales. Por lo tanto, se revisó entre 2012 y 2018. Como miembro de la plataforma «Coordinación de las Acciones de Incidencia de la Sociedad Civil para la Gobernanza de los Recursos Naturales» (*Coordination des Plaidoyers de la Société Civile sur la Gouvernance des Ressources Naturelles*), la CERN formó parte de este proceso de revisión, en el que participaron el Gobierno, e es empresas mineras y la sociedad civil, con el apoyo de representantes de las comunidades.¹² El objetivo principal de la plataforma de Coordinación era proteger los intereses de

¹⁰ En una sesión preparatoria de dos horas con representantes del gobierno local y de la empresa antes de la presentación, un directivo de la empresa reaccionó al ver la foto de Hérítier Wembo en el informe diciendo: «Su estudio corre el riesgo de provocar un incendio en la ciudad de Durba».

¹¹ En 2019 pasó a denominarse Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

¹² La Coordinación organizó cuatro reuniones preparatorias: una en Kisangani, otra en Lubumbashi y otra en Kinshasa, con organizaciones de la sociedad civil activas en la defensa de la gobernanza de los recursos naturales en estas provincias. Una cuarta reunión en Kinshasa dio lugar a un documento final basado en estas consultas. El CERN organizó sus propias consultas con las ORN de todas las diócesis para recabar opiniones sobre las deficiencias del Código Minero de 2002. Estas se incorporaron al documento final.

las poblaciones locales en materia social, económica y medioambiental. Sin embargo, durante el proceso de revisión del Código Minero surgieron bloqueos, y la sociedad civil actuó como mediadora entre las empresas y el gobierno. Dada su credibilidad, la CERN acogió en su oficina varias reuniones de consulta y coordinación entre la sociedad civil y las empresas mineras para superar las divergencias entre el gobierno y las empresas mineras.¹³ Algunos de los principales logros de la Plataforma de Coordinación fueron: garantizar que la parte de las regalías mineras atribuida a los gobiernos locales se transfiriera directamente a su cuenta bancaria (ya que el gobierno central no siempre había redistribuido la parte de las regalías correspondiente a los gobiernos locales), acordar los términos de referencia (*cahier de charges*) sobre lo que la empresa proporcionará y financiará para responder a las necesidades de la comunidad, y destinar un mínimo del 0,3 % de la facturación de una empresa minera al desarrollo local. En cuanto a este último punto, tras acordar una cifra del 0,3 % durante las reuniones con la sociedad civil y las empresas mineras, el Gobierno la redujo al 0,1 % en el Código Minero revisado presentado para su aprobación parlamentaria. El cambio había quedado registrado. Gracias a la vigilancia de la sociedad civil y a la cooperación de algunos miembros del Parlamento, el secretario del CERN y un miembro del personal de otra ONG que forma parte de la plataforma de *Coordinación* pidieron a un diputado que planteara en el Parlamento la discrepancia entre lo acordado y lo presentado. El Parlamento votó a favor de mantener la cuota mínima acordada del 0,3 %.

Una tercera oportunidad de incidencia surgió durante un interrogatorio por parte de un agente de la Agencia Nacional de Inteligencia (*Agence Nationale de Renseignements*, ANR). La publicación del informe en Durba había despertado la atención de los servicios de seguridad del país. A su regreso a Kinshasa, el secretario ejecutivo de la CERN fue interrogado por un agente de inteligencia: la presentación del informe se consideraba en ciertos círculos como una cuestión de seguridad. La entrevista tuvo lugar en un restaurante de la sede de la CENCO, después de que el secretario ejecutivo de la CERN se negara a que se celebrara en las oficinas de la ANR. Durante la comida, el agente de inteligencia pareció estar grabando la conversación con una cámara oculta en un bolígrafo, algo que el secretario ejecutivo ya había previsto. Por lo tanto, él también grabó la conversación con su teléfono móvil. Otra precaución que se tomó fue ir acompañado de una persona de la MONUSCO (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo), cuya identidad y función no se revelaron al agente de inteligencia. Debido al vínculo directo entre la ANR y el presidente, la ANR depende directamente del presidente de la RDC. El secretario de la CERN aprovechó la reunión para presionar a favor de un juicio que llevara ante la justicia a los militares responsables de violaciones de los derechos humanos, y para solicitar una revisión estatal de los servicios de seguridad asignados a la concesión de Kibali.

Acompañamiento

A lo largo de las fases de investigación, publicación y defensa, fue fundamental el acompañamiento de los miembros de la comunidad, especialmente de Héritier Wembo, cuya agresión por parte de los militares fue lo que motivó la investigación. Para obtener un pasaporte y un visado para su viaje a Roma, la CERN tuvo que llevarlo a Kinshasa. Dado que su caso había enfurecido a algunos, y que estos estaban dispuestos a sabotear la inversión de Kibali¹⁴ —incluidos vehículos, maquinaria, oficinas y otros equipos—, su viaje se llevó a cabo rápidamente y en secreto. Wembo viajó de noche desde Durba a Kisangani (a 300 km de distancia) para luego volar directamente a Kinshasa. Quedó bajo el cuidado del CERN, que lo ocultó.

¹³ Entre estas divergencias se encontraba el aumento de las regalías relacionadas con el cobalto, que pasaron del 2,5 % al 10 % en el Código Minero revisado. Algunas empresas intentaron bloquear todo el proceso de revisión alegando que tal aumento no podía justificarse, dado que el Estado no suministra electricidad y ellas tienen que financiar por su cuenta la infraestructura pública necesaria para las operaciones mineras.

¹⁴ A los ojos de la población local, la empresa y el Estado actúan conjuntamente, ya que es el Estado el que permite que una empresa opere y es el Estado el que garantiza la seguridad de la empresa. Cuando la seguridad del Estado perjudica a la población, existe el riesgo de que los ciudadanos dañen a su vez la infraestructura de la empresa.

Una semana después de abandonar Durba, una persona que se identificó como miembro de una organización de la sociedad civil acudió al domicilio de Wembo con el pretexto de que la MONUSCO quería que recibiera tratamiento en Uganda. CENCO sospechó que se trataba de una trampa para hacerle desaparecer: Wembo era una vergüenza para el Estado y la empresa, ya que los abusos que había sufrido socavaban su imagen. ¿Cómo podría alguien buscar tratamiento en julio para alguien cuyas quemaduras de segundo grado se habían producido en enero? Este incidente hizo que CENCO tomara precauciones adicionales a la hora de facilitar el testimonio de Wembo sobre las violaciones de los derechos humanos, para no poner en peligro su vida al dar testimonio ante una audiencia internacional del abuso que había sufrido. Gracias al apoyo financiero de Misereor (la ONG de desarrollo de la Conferencia Episcopal Alemana), Wembo prestó testimonio en el Vaticano. Fue un relato vívido y cautivador de la situación en Kibali; sin embargo, surgieron dos nuevos retos. En primer lugar, Wembo y sus familiares querían que se quedara en Europa, aunque fuera de forma ilegal al principio. En segundo lugar, era demasiado peligroso para él regresar a Durba, ya que había mancillado la reputación de la empresa al buscar justicia por la violación de los derechos humanos que había sufrido. La CERN no podía permitir que Wembo permaneciera indocumentado en Europa. Regresó a Kinshasa, bajo el cuidado del CERN hasta que fue más seguro para él volver a la provincia de Haut-Uélé. Partió hacia Isiro, la capital provincial, y la CERN (con apoyo simbólico de CAFOD) le ayudó a poner en marcha un negocio de sastrería, ya que sus quemaduras ya no le permitían trabajar como minero artesanal y tenía experiencia previa en sastrería. Desde entonces con su abuela vive allí.

Tras el informe de PAX-CERN, se llevó a cabo una investigación y el sistema de justicia militar organizó una audiencia judicial itinerante en Durba para juzgar a los acusados de violaciones de los derechos humanos. El comandante «Coup par coup» («Golpe por golpe»), que estaba a cargo de la seguridad en la concesión de Kibali, fue el principal acusado.¹⁵ La Oficina de Derechos Humanos de la MONUSCO se puso en contacto con la CERN para organizar la comparecencia de Wembo en la vista. El viaje de Wembo de Kinshasa a Durba se organizó en secreto y corrió a cargo de la MONUSCO. Wembo prestó declaración, lo que condujo a que el comandante «Coup par coup» fuera condenado a diez años de prisión y expulsado del ejército. CERN no pudo seguir las audiencias de apelación en Kisangani debido a la falta de recursos.

Una de las principales reivindicaciones de las organizaciones de la sociedad civil durante la revisión del Código Minero fue que una parte de las regalías mineras destinadas a las autoridades locales donde se extraen los minerales se pagara a la provincia, a la Entidad Territorial Descentralizada (ETD), como una ciudad, comuna, sector o jefatura, y al Fondo *Minero para las Generaciones Futuras* (FOMIN). Durante una visita a Durba de tres organizaciones de la sociedad civil (entre ellas CERN), a invitación de Kibali Goldmines para impartir formación a las comunidades locales, los responsables de las ETD afectadas por las operaciones de Kibali se quejaron de que nunca habían recibido su parte de las regalías (15 %). En presencia de las organizaciones de la sociedad civil invitadas, Kibali Goldmines presentó pruebas que confirmaban el pago de regalías al gobierno central (50 %) y al gobierno de la provincia de Haut-Uélé (25 %), pero no había pruebas del 15 % de las regalías destinadas a las ETD ni del 10 % al FOMIN. Dado que en el pasado el gobernador provincial saliente había malversado los fondos de las ETD, CERN denunció la situación junto con otras organizaciones de la sociedad civil y emitió un comunicado respaldado por la Coordinación de la Sociedad Civil para la Gobernanza de los Recursos Naturales, que lo difundió en las redes sociales. Esto hizo pública la situación y como consecuencia, el gobernador provincial transfirió la parte de las regalías a las cuentas bancarias de las ETD correspondientes.

¹⁵ Su verdadero nombre es Capitaine Ngongo Shungu Paul. Se le dio el apodo de «Golpe por golpe» porque azotaba sin piedad a las personas que arrestaba. También ha sido acusado de tortura.

Capacitación

Como se menciona en la sección de Antecedentes, el Código Minero revisado estipula que se les asigne a las entidades locales afectadas por las operaciones mineras un mínimo del 0,3 % de la facturación de una empresa minera, así como unos pliegos de condiciones (*cahier de charges*) que definan los proyectos comunitarios acordados y otras necesidades locales que la empresa minera se compromete a financiar y satisfacer. Por lo tanto, es importante formar a las comunidades afectadas en la gestión de las regalías mineras y la negociación de los pliegos de condiciones, ya que a menudo desconocen las realidades de la minería y carecen de la capacidad para negociar con pleno conocimiento de los hechos. Dada la confianza que tanto Kibali Goldmines como las comunidades locales tenían en algunas organizaciones de la sociedad civil debido a su experiencia y profesionalidad, entre ellas CERN, la empresa las invitó en tres ocasiones a impartir formación para desarrollar estas capacidades.

4. Resumen y reflexiones críticas

El estudio de caso de Kibali ofrece una perspectiva de la visión y la orientación del trabajo de CENCO en el sector minero. La documentación de las violaciones de los derechos humanos en la concesión de Kibali fue el punto de partida, al que siguió un informe de investigación en profundidad y, posteriormente, una serie de acciones, como la protección de Hériter Wembo, la facilitación de su testimonio ante una audiencia internacional y el juicio de quienes abusaron de él, el diálogo con Kibali Goldmines para mejorar las relaciones con la comunidad, y la formación de las comunidades locales en técnicas de negociación y conocimiento del Código Minero. El estudio de caso también puso de relieve el cuidado que hay que tener al publicar los resultados de la investigación, para que las comunidades locales no se vean afectadas negativamente por una posible reacción adversa.

Lo que el caso también revela es el dilema al que a menudo se enfrenta el Estado: por un lado, necesita tranquilizar a los inversores mineros, ya que estos contribuyen a los ingresos públicos; por otro, debe proteger a las poblaciones locales de los riesgos de abusos y garantizar sus derechos humanos. Atrapado entre proteger la inversión minera y garantizar la seguridad de las operaciones mineras, y atado por acuerdos contractuales

con las empresas, por un lado, y proteger los derechos de las comunidades locales afectadas por las operaciones mineras, por otro, el Estado suele priorizar la seguridad de la inversión minera por encima de la seguridad de los medios de vida de las comunidades y los derechos de las poblaciones locales. La comprensión de la dinámica de la acción en este estudio de caso podría abordarse desde tres perspectivas: su estructura subyacente, su ejecución y sus resultados.

La estructura que sustentó el conjunto de acciones descritas anteriormente fue el CERN, el brazo técnico de la CENCO. Para que sus acciones tuvieran éxito, la CERN debía cumplir al menos cuatro criterios clave: 1) credibilidad y legitimidad; 2) la capacidad de establecer o gestionar redes y mantener buenas relaciones; 3) la disponibilidad de apoyo financiero;



y 4) la capacidad de gestionar riesgos y demostrar resiliencia. En primer lugar, para ser creíble y legítimo, el CERN contaba con personal a nivel de la oficina nacional y con coordinadores a nivel diocesano. Nombrados por el obispo local, trabajaban bajo la dirección de un secretario ejecutivo que comprendía la visión de la CENCO y era capaz de traducirla en acciones. Los coordinadores se familiarizaron con esta visión a través de la formación y de principios operativos coherentes, objetivos claros y métodos de trabajo. Además, el respaldo moral de la CENCO fue esencial no solo para la credibilidad, sino también para movilizar fondos. En segundo lugar, el secretario ejecutivo de la CERN tuvo que gestionar redes de organizaciones tanto dentro como fuera de la Iglesia, al tiempo que mantenía relaciones a diversos niveles, como la red de Observatorios de Recursos Naturales, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones estatales y el sector privado, sin comprometer los principios. En tercer lugar, la financiación fue crucial para la implementación de todas las acciones. Al carecer de financiación propia, la CERN tiene que depender del apoyo externo, lo que supone una fuente de inseguridad. En este caso, la financiación procedió de PAX, Misereor, la Oficina de Derechos Humanos de la MONUSCO y algunos socios anónimos, especialmente para cubrir los gastos de viaje de los dos representantes comunitarios a la conferencia del Vaticano de julio de 2015. El secretario ejecutivo del CERN tuvo que recurrir en ocasiones a sus recursos personales para facilitar la estancia clandestina de Wembo. En cuarto lugar, todo el proceso entrañaba varios riesgos. Durante la investigación de campo, existía el riesgo de que los investigadores fueran acosados por los mineros. Dado que a veces se enfrentan al acoso de las autoridades estatales, los mineros adoptan una actitud recelosa hacia cualquiera que se acerque a fotografiarlos o a hacerles preguntas. Una vez publicada la investigación, se temía un levantamiento popular contra la empresa; el interrogatorio del secretario ejecutivo de la CERN por parte de un agente de la Agencia Nacional de Inteligencia puso de manifiesto que la situación era una cuestión de seguridad nacional. El hecho de que se buscara a Wembo tras su partida de Durba también supuso un riesgo, al igual que su tentación de permanecer en Europa. Su regreso a Kinshasa tras testificar contra la empresa en Roma fue tan arriesgado como testificar contra el comandante «Coup par coup» durante la audiencia pública en Durba. Por lo tanto, la CERN necesitaba desarrollar mecanismos de gestión de riesgos y fomentar la resiliencia.

El plan de acción se estructuró en torno a los niveles local, diocesano, provincial, nacional e internacional. A nivel local, participaron varios organismos: la ORN de la diócesis de Isiro-Niangara y su obispo, el administrador del territorio de Watsa, los líderes de los sectores y jefaturas, las organizaciones locales de la sociedad civil, los miembros de la comunidad, los medios de comunicación y la empresa minera. La provincia tuvo poca participación, salvo por un comunicado de prensa destinado a desbloquear las regalías mineras de las ETD. La CERN no pudo actuar a nivel judicial provincial durante la apelación del juicio del comandante «Coup par coup». A nivel nacional, la CERN colaboró con PAX, los órganos de la CENCO, la alta dirección de Kibali Goldmines, organizaciones de la sociedad civil, algunas otras empresas mineras, la Embajada de Italia, la Nunciatura Apostólica, la Agencia Nacional de Inteligencia —que desempeñó un papel en la organización de la vista del tribunal móvil—, los familiares cercanos de Wembo y la Oficina de Derechos Humanos de la MONUSCO. A nivel internacional, la iniciativa contó con la participación del entonces Consejo Pontificio «Justicia y Paz» del Vaticano, Misereor, PAX, CAFOD y familiares de Wembo, así como de los medios de comunicación.

En cuanto a los resultados, la publicación del informe tuvo efectos inesperados que fueron mucho más allá de sus tres áreas principales de recomendaciones: seguridad, comunicación y convivencia. Esto solo fue posible gracias al mantenimiento de relaciones con diversas redes. La imagen y la credibilidad de CENCO, CERN y PAX se han preservado, sobre todo al mantener altos estándares de calidad en el trabajo. Desde que se publicó el informe, la empresa creció y su mina se considera ahora un referente en África Central. La producción parece haber alcanzado su plena capacidad. En 2025 se produjeron aproximadamente 670 000 onzas de oro, lo que generó unos ingresos de 2300 millones de dólares estadounidenses. La empresa minera organiza ahora

conferencias trimestrales en las que el diálogo con las distintas partes interesadas parece ser fructífero. En 2022, Kibali GoldMines firmó un pliego de condiciones (*cahier de charges*) por un valor de 8,7 millones de dólares estadounidenses a lo largo de 5 años, que incluye la financiación de nuevas escuelas y hospitales, el suministro de agua potable, proyectos agrícolas y otros proyectos de desarrollo local, así como la formación y el empleo de los jóvenes de la comunidad en el ámbito de las energías renovables (centrales hidroeléctricas).

A pesar de este éxito, la respuesta de la CENCO/CERN a la minería presenta varias limitaciones. Una de las principales es que las decisiones relativas a las operaciones mineras son prerrogativa del Estado, que celebra acuerdos con las empresas. La Iglesia desempeña únicamente un papel de vigilancia, supervisando la situación sobre el terreno. Educa, denuncia, cuestiona, media, apoya y defiende. Esto plantea muchos retos y preguntas:

- ¿Es posible establecer un diálogo sincero y continuo entre las empresas mineras y las comunidades afectadas en un contexto en el que el Estado no cumple con sus obligaciones para con la población? ¿Dónde pueden encontrar una plataforma para expresar sus quejas?
- Muchas diócesis se enfrentan a dificultades financieras. Una empresa que opera dentro de la jurisdicción de la diócesis podría mostrarse generosa a la hora de financiar proyectos para la Iglesia, ya sea a petición de esta o por iniciativa propia como parte de su responsabilidad social corporativa. En este caso, ¿no se vería socavada la credibilidad de la Iglesia? Al guardar silencio ante los posibles daños derivados de las operaciones de la empresa, ¿no sería vista por la opinión pública como cómplice?
- La labor de la Iglesia requiere apoyo financiero. ¿Dónde encontrar los recursos necesarios? ¿Puede la Iglesia aceptar financiación del sector público o privado sin sentirse comprometida?
- ¿Cómo abordaría la Iglesia las deficiencias internas en la gestión de los fondos recibidos, a riesgo de verse mancillada o acusada de corrupción?
- ¿Cómo se pueden abordar las preocupaciones en materia de seguridad ante las amenazas de las empresas, el Estado o las comunidades?
- ¿Cómo podemos potenciar la capacidad de las comunidades locales, especialmente a través de las parroquias, para informarse, recibir formación y participar en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y el medio ambiente en el ámbito de la minería?
- ¿Debería una estructura nacional supervisar todas las diócesis, o debería centrarse en una sola región en aras de una mayor eficiencia?

Este estudio de caso ha ilustrado cómo la Iglesia católica en la RDC ha cumplido un aspecto de su misión profética en el sector minero. Basándose en un análisis sociopastoral, la CENCO estableció una comisión ad hoc responsable de los recursos naturales, la CERN, que elaboró en 2009 un «Vademécum para los ciudadanos congoleños sobre la gestión de los recursos naturales» para orientar esta labor pastoral. Este documento ofrecía un análisis del contexto del país, los problemas y las preocupaciones, así como las expectativas de la población en relación con los recursos naturales. A continuación, establece los principios que, según la tradición social de la Iglesia, deben guiar la explotación de los recursos naturales y propone posibles soluciones a los problemas que a menudo pueden surgir en las zonas mineras.

Hoy en día, esta labor pastoral continúa en medio de unas relaciones tensas entre la Iglesia católica y el Estado congoleño. La iniciativa del «Pacto por la Paz», que tenía por objeto conducir a un diálogo amplio e inclusivo,¹⁶ recibió una fría acogida por parte del Gobierno. Esta habría sido una oportunidad para reflexionar sobre la

¹⁶ En diciembre de 2024, la CENCO y la Iglesia de Cristo en el Congo, que agrupa a iglesias protestantes y evangélicas, lanzaron la iniciativa un «Pacto social por la paz y la convivencia en la República Democrática del Congo y la región de los Grandes Lagos». Véase Kambashi y Zengarini (2025) para más información.

gestión de los recursos naturales, y de los recursos minerales en particular. La labor llevada a cabo por el CERN requiere financiación. La movilización de recursos a nivel nacional e internacional supone un reto importante, y la CENCO debería abordar esta cuestión.

El estudio de caso muestra cómo los principios de la doctrina social católica de dignidad humana, solidaridad y cuidado de nuestra casa común se tradujeron en acción mediante la movilización de personas, estructuras y recursos para devolver la esperanza a una población cuyos gritos de auxilio habían sido escuchados desde el ámbito local hasta el internacional. Las acciones emprendidas restauraron la confianza en una empresa minera. Su concesión, custodiada por soldados conocidos por sus abusos y que se había convertido en un lugar donde se violaba la dignidad humana, se transformó. La población se beneficia ahora de las regalías mineras y otros fondos destinados al desarrollo comunitario. Esto no estuvo exento de grandes riesgos y desafíos. Ante los limitados recursos financieros, la desconfianza, las sospechas y la necesidad de recursos humanos cualificados, CENCO, CERN y PAX han logrado mantener su reputación de credibilidad y dignidad.

Referencias

- African Development Bank. N.d. "[Democratic Republic of the Congo Economic Outlook](#)".
- African Green Minerals Observatory. n.d. "[Green Mineral Profile DRC](#)".
- Bloomberg News. 2026a. "[Congo state firm strikes deal to sell copper from Glencore mine](#)". 18 February 2026.
- Bloomberg News. 2026b. "[Zijin's Congo lithium mine set to be among world's biggest](#)". 24 March 2026.
- Business and Human Rights. 2025. "[DRC: Dam failure at Huayou Cobalt subsidiary reportedly spills toxic water into Lubumbashi](#)". 10 November 2025.
- CENCO (Conférence Episcopale Nationale du Congo). 2007. "A vin nouveau, outres neuves. Ne pas decevoir les attentes de la nation." *Message for the 47th anniversary of independence*. July 2007.
- CENCO. 2009. *Vade mecum du citoyen congolais sur la gestion des ressources naturelles*. Kinshasa: CENCO.
- EITI (Extractive Industries Transparency Initiative). 2025. [Rapport ITIE-DRC 2023](#). Accessed 1 May 2026.
- Fualdes, N. 2018. "[RDC: La Sokimo s'inquiète de l'impact de la fusion Barrick/Randgold à Kibali](#)". *Jeune Afrique*. 28 September 2018.
- Global Witness. 2007. "[The Congolese Mining Sector in the Balance: Lack of transparency risks undermining review of mining contracts](#)". *A Global Witness briefing*. 1 October 2007.
- Global Witness. 2025. "[New investigation suggests EU trader Traxys buys conflict minerals from DRC](#)". 15 April 2025.
- Global Witness. 2026. "[Deadly DRC mine disaster highlights human cost of coltan](#)". 3 February 2026.
- Francis. 2015. "[Message of his Holiness Pope Francis to the President of the Pontifical Council for Justice and Peace on the Occasion of the Meeting "A Day of Reflection – United with God, We Hear a Cry"](#)". 17-19 July 2015.
- Kambashi, S. and L. Zengarini. 2025. "[Churches in DRC launch roadmap for peace in Great Lakes Region](#)". 17 January 2025.
- Mongabay Africa. 2026. "[200 dead, more missing in another DRC mine collapse](#)". 6 March 2026.
- OPHI (Oxford Poverty and Human Development Initiative). 2025. "[Global MPI Country Briefing 2025: Congo, Democratic Republic of the](#)".
- PAX and CERN (Commission Episcopale pour les Ressources Naturelles). 2015. [Géant Minier Kibali. Ôter les Impuretés pour que l'Or Soit Pur](#).
- UN Security Council. 2003. [Final report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources](#)

[and Other Forms of Wealth of DR Congo](#).
World Bank. N.d. “[Overview: DRC](#)”.

Citación recomendada

Muhiya, Henri (2026). “La mina de oro de Kibali, Diócesis de Isiro-Niangara, República Democrática del Congo”. En Severine Deneulin y Caesar Monteverchio (coord). *Visión Católica de la Minería: Estudios de Casos*. University of Notre Dame y Laudato Si’ Research Institute, Campion Hall, University of Oxford. <https://doi.org/10.7274/32859806>

Créditos de las fotos

Todas las fotos de este informe han sido cedidas por Henri Muhiya. Todos los derechos reservados.